

entiende el juez que actúa, fué la que quisieron citar los Sres. Sandoval y Bülle, haciéndolo de la de 4 de Diciembre del año próximo pasado en su escrito de fojas 2, derogada por aquella.

Segundo: Notifíquese, publíquese en el periódico oficial, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Fernando María Astiazaran, Juez de Distrito de Sonora, así lo decretó firmando con los testigos de su asistencia ordinaria.—*Fernando M^a Astiazaran.—A.—P. del Rincon.—A.—J. López.*

Es copia que certifico. Guaymas, Octubre 10 de 1874.—*Fernando M^a Astiazaran.—A.—P. del Rincon.—A.—J. López.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 15 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por los Sres. Sandoval y Bülle ante el juzgado de Distrito de Sonora, contra el administrador de rentas de Guaymas que les cobra la cantidad de ciento diez y siete pesos diez centavos, por el ocho por ciento de derechos de consumo de efectos internados al Distrito de Magdalena. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; el pedimento del ciudadano promotor fiscal y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos; la sentencia del Juez de Distrito de Sonora de 7 de Octubre próximo pasado, declarando: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Sandoval y Bülle contra el acto de que se quejan.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza. Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 5 de 1875.—*Lie. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, por el C. Carlos A. Garza, contra los actos del C. Rafael M. de la Garza, alcalde 4º de Monterey, que lo citó á contestar un juicio sin ser autoridad legítima para ello.

PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que mandados suspender los procedimientos del ciudadano alcalde 4º constitucional de esta ciudad, como lo solicitó el ocurrente C. Carlos Garza en este juicio de amparo que tiene promovido contra dicho señor alcalde, en virtud de creerlo incompetente para obligarlo como pretende, á ocurrir ante él á contestar demanda sobre cobro de pesos, se le han pasado los autos relativos, á efecto de que ejerza su ministerio, pidiendo lo que crea de justicia en cuanto á lo principal de la queja, en el término prefijado por la ley de la materia.

Puede decirse, que la cuestion promovida por el expresado C. Carlos Garza, al entablar su queja de amparo, es de puro derecho, supuesto que ella se reduce á investigar solo, si el señor alcalde contra quien se interpone, es ó no legítimo, es decir, si está ó no nombrado conforme á la Constitucion particular de Nuevo Leon, pues el quejoso hace dimanar la incompetencia que objeta, de la ilegitimidad de la autoridad ante quien se le ha demandado: y este vicio, tratándose de una autoridad local, debe sin duda buscarse con presencia de la Constitucion y leyes locales que establecen el modo, tiempo y forma en que dichas autoridades se nombran, y fijan los requisitos que para su legitimidad son indispensables.

Es inútil toda discusion acerca de la duda que para algunos se llegó á presentar, relativa á si el Poder Judicial de la federacion tenia ó no facultades de investigar el origen de las autoridades locales de un Estado, atenta su soberanía para el régimen interior, que la misma Constitucion de la República tiene garantizada, toda vez que la cuestion sobre este punto se ha resuelto ya por la Suprema Corte de Justicia en sentido afirmativo. La soberanía, pues, de los Estados, no se invade por el poder federal, llevando sus investigaciones hasta examinar el origen de sus autoridades legales, cuando se les objeta incompetencia por ilegitimidad, segun acuerdo expreso del primero y mas respetable tribunal de la Nacion, que reconoce la facultad de llevar hasta aquel grado sus investigaciones, y la objecion que se hacia sobre este particular ya no tiene razon de ser. En consecuencia, la discusion en el presente caso solo debe versar, como antes se ha indicado, sobre si la investidura con que el C. Rafael M. de la Garza, que titulándose alcalde 4º constitucional, pretende compeler al quejoso á que ocurra ante él á contestar una demanda civil sobre pesos, la ha recibido conforme á la ley ó no, es decir, sobre si es legítima ó no la autoridad que ejerce, porque sabido esto, necesa-

sariamente queda averiguada la competencia ó incompetencia á que se refiere el juicio promovido.

Para obtener un resultado semejante, preciso será tener presentes las disposiciones constitucionales de Nuevo Leon, relativas á las elecciones de sus funcionarios municipales, sin perder de vista que el art. 41 de la Constitucion federal, garantiza á los Estados su soberanía, siempre que en su ejercicio se ajusten á los términos establecidos en sus respectivas constituciones particulares; de donde se infiere con bastante claridad, que toda infraccion á la Constitucion local de un Estado, constituye tambien un ataque al citado art. 41 de la general de la República, y sin olvidar tampoco, que toda autoridad que, por emanar de un origen diverso al establecido y prefijado en la Constitucion y leyes constitucionales de un Estado, sea ilegítima ó incompetente por lo mismo en él, debe ser considerada y reputada con iguales vicios ante el poder federal, porque el art. 16 de la Constitucion de la República es terminante en su letra y espíritu y no admite distincion alguna.

Sentado esto, veamos lo que relativamente al caso que nos ocupa prescribe la Constitucion del Estado, y sus leyes constitucionales relativas de 16 y 22 de Octubre de 1857. El art. 48 de la primera, expresa que una ley reglamentará los puntos relativos á la eleccion de funcionarios municipales, de que no se hubiesen ocupado los artículos inmediatamente anteriores que se refieren al mismo asunto; y el 108 dice: que la ley señalará el número de alcaldes, regidores y síndicos de que deben formarse los ayuntamientos, y detallará sus facultades y los requisitos que deben tener los nombrados. Las leyes á que en estas disposiciones se alude, son las citadas de 16 y 22 de Octubre, la primera de las cuales en su art. 30, y la segunda en los 26 y 27, prescriben que anualmente, en Diciembre deben verificarse las elecciones municipales, y el 1º de Enero siguiente tomar posesion los nombrados; pero

según se vé por la credencial que obra á fojas 18, presentada por el ciudadano alcalde 4º, él fué nombrado el 28 de Junio del corriente año, no directamente por el pueblo, sino por la junta de escrutadores. En cuanto á estos, el art. 47 de la Constitución local se expresa así: «Los escrutadores de las respectivas secciones municipales, se reunirán siempre que dentro del año tengan que hacer alguna elección municipal;» y lo mismo previene el 39 de la ley de 16 de Octubre. Aquí conviene recordar, que celebrada en esta ciudad la elección de funcionarios municipales en Diciembre, en los términos establecidos por la Constitución y ley electoral, un decreto de la legislatura, el núm. 27 de 25 del mismo Diciembre próximo pasado, declaró nulas las credenciales extendidas á los ciudadanos que entonces resultaron nombrados, é impidió la toma de posesión de sus cargos, cuyo decreto debe tenerse como anticonstitucional, supuesto que el Congreso, no solo no tiene facultades para hacer declaraciones semejantes, sino que terminantemente le está prohibido hacerlas, por los arts. 39 y 44 del Código local. Mas en el supuesto de que el decreto citado pudiera surtir todos sus efectos en este respecto, como en cuanto á los escrutadores que en aquella elección fueron nombrados, nada se dispuso que pudiera alegarse, aunque fuera como un aparente pretexto de inhabilidad, porque á su nombramiento, como proveniente de una elección válida y legítima, ningún vicio ó defecto podría objetarse, es evidente que ellos quedaron en el pleno goce de sus facultades electorales, y que debieron ellos también, en el supuesto de que, atendida la nulidad de credenciales decretada, debiera estarse en el caso de falta absoluta de funcionarios municipales, hacer el nombramiento de estos, como lo mandan los citados arts. 47 de la Constitución y 39 de la ley electoral.

Pero lejos de haberse procedido en estos términos, el mismo Congreso del Estado, arrogándose facultades de que carece, contra

el art. 39 de la Constitución, convocó á nuevas elecciones municipales, y de la celebración de éstas, que tuvo lugar á principios de Junio último, resultaron los escrutadores, cuya junta confirió al C. Rafael M. de la Garza, su nombramiento de alcalde 4º, según se ve por su credencial. La ilegitimidad de esta última elección es notoria, supuesto que no se ajustó á los preceptos de la Constitución y ley relativa, y de aquí dimana indudablemente la ilegitimidad de los nombramientos que en virtud de ella se expidieron, entre los cuales se cuenta el del C. Rafael M. de la Garza.

Ahora bien, si la investidura de este ciudadano, es ante las leyes del Estado ilegítima, carece absolutamente de competencia para ejercer autoridad alguna, y al pretenderlo con conminaciones y amenazas de multas y prisión, viola evidentemente el art. 16 de la Constitución de la República, en cuyo caso procede el amparo que se solicita.

La circunstancia de que no ha mucho, el juzgado concedió amparo en un caso semejante del todo al que nos ocupa, hace creer al suscrito inútil estenderse mas en esto, y que lo que lleva expuesto basta para fundar la opinión que emite en la proposición siguiente, de acuerdo también con los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, y el 1º frac. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, cuya proposición sujeta á la aprobación del juzgado.

Única: La Justicia de la Unión ampara y protege al C. Carlos Garza, contra los actos del C. Rafael M. de la Garza, que llamándose alcalde 4º, lo cita con conminaciones de multas y amenazas de prisión, á contestar ante él una demanda sobre cobro de pesos.

Monterey, 25 de Octubre de 1874.—
Lic. S. Roel.

Es copia que certifico.—Monterey, 26 de Noviembre de 1874.—*S. Roel.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Monterey, Noviembre 24 de 1874.

Visto este juicio de amparo promovido por el C. Carlos A. Garza, contra los actos del C. Rafael M. de la Garza, alcalde 4º de esta ciudad, por los que lo mandó citar varias veces imponiéndole multas si no comparecía, por creer el quejoso que se viola en su persona la garantía que le otorga la Constitución general de la República en su art. 16, por no ser competente ó legítima la autoridad que lo cita. Vistos los informes de dicho juez, en que dice: que en Junio último fué nombrado por los escrutadores alcalde 4º suplente, y que como tal, está funcionando como autoridad; que habiendo sido demandado el quejoso, lo mandó citar conminándolo con multas, y que no habiendo comparecido, dió orden para que se le pusiera en detención: y que respecto de su legitimidad, como juez, se refiere á lo que personas de esta Capital han escrito por la prensa en un caso igual. Visto lo expuesto por el ciudadano promotor fiscal, solicitan, do sea amparado el querellante, por ser incompetente la autoridad contra quien se queja. Y visto todo lo que consta en estos autos, así como la citación para sentencia, y Considerando: que la autoridad ejecutora de los actos reclamados, fué nombrada por los escrutadores, que deben su origen á la convocatoria de 20 de Mayo último, la cual de un modo indirecto declaró nulas las elecciones verificadas en Diciembre del año anterior, así como también al decreto de 23 del mismo Diciembre, que nulificó lo hecho por la mayoría de la junta de escrutadores de esta municipalidad, en los días 21 y 22 del propio mes.

Que la convocatoria y decreto citados, fueron dados por la legislatura del Estado, sin tener facultades para ello, ó contra la autorización que le dió el pueblo, que es el verdadero soberano, en la Constitución local, según sus arts. 41 y 66; no debiendo

tener efecto lo ordenado en dichas disposiciones, en el caso especial de que se trata.

Que habiendo sido nombrado dicho alcalde 4º, contra lo dispuesto en la Constitución particular del Estado, que está garantizada por el art. 41 de la general de la República, es autoridad ilegítima, ó incompetente, y se ha violado también el pacto federal.

Que se han dictado diversas ejecutorias por la Suprema Corte de Justicia, declarando, que las autoridades ilegítimas son incompetentes, cuyo punto ya ha sido discutido suficientemente en diferentes sentencias, y demostrado con razones incontrovertibles, siendo por demas, volver á tratar lo que ha llegado á ser como un axioma de derecho constitucional.

Que en un caso igual al presente, con todas sus circunstancias, y en que se trató de otra autoridad que tenía el mismo origen, se resolvió por la Suprema Corte en 21 de Setiembre último, que cabía el amparo.

Que todo hombre tiene la garantía de no poder ser molestado en su persona, familia, etc., sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente; que funde y motive la causa legal del procedimiento, art. 16 de la Constitución general; y en el presente caso, ya se ha dicho que el ciudadano alcalde 4º de esta ciudad, es ilegítimo ó incompetente, procediendo el amparo conforme á dicho artículo.

Que aunque el expresado alcalde no sea autoridad legítima, lo es de hecho, y eso basta para que tenga lugar el amparo, á diferencia de lo que hiciere un particular que no tenga aquel carácter, contra el que si no cabe tal recurso, es porque quedan expeditas las vías ordinarias cuando viole los derechos de tercero.

Y visto y considerado todo lo que ver y considerar convino, y de conformidad con lo expuesto, con los arts. 101 y 102 de la Constitución general y ley de 20 de Enero de 1869 y con lo pedido por el ciudadano promotor fiscal, se declara:

Que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Carlos A. Garza, contra los actos del ciudadano alcalde 4º de esta ciudad, por los que lo citó y conminó con multas.

Notifíquese, sáquense las copias de estilo, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El ciudadano Juez de Distrito de Nuevo Leon, definitivamente juzgando, así lo decretó y firmó por ante mí, el secretario. Doy fé.—*Lic. F. Valdés Gómez.*—*Pablo Borrego*, secretario.

Es copia que certifico. Monterey, Noviembre 25 de 1874.—*Pablo Borrego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 19 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Nuevo Leon, por el C. Carlos A. Garza, contra los actos del C. Rafael M. de la Garza, alcalde 4º de Monterey, que lo citó á contestar un juicio sin ser autoridad legítima para ello. Vista la sentencia del Juez de Distrito que amparó al quejoso, y las demas constancias que obran en autos. Con fundamento de lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Nuevo Leon, el 24 de Noviembre próximo pasado que amparó al quejoso. Devuélvanse los autos al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Si-*

TOMO VII.—PARTE II.

mon Guzman.—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico.—México, Diciembre 31 de 1875.—*Lic. Enrique Tardá*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por Nicolás Medina y Manuel Soto Torres, contra la jefatura política de la capital de ese Estado, que los juzgó y sentenció á muerte por delito de robo con usallo.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez federal de Distrito.

El jefe de hacienda que suscribe, en su titucion del ciudadano promotor fiscal, dice:

Que como consta de los autos que estan á la vista, en el juicio de amparo que promueven los reos Manuel Soto (á) Torres, y Nicolas Medina, resultan probados perfectamente contra estos, los cargos siguientes:

El dia 31 de Julio próximo pasado, en el punto nombrado "Cerritos pelones", viniendo del rancho del Ilipazote Maximiano Lucbano y su hermana Dª Andrea, fueron asaltados por dos bandidos, cuyos instantos criminales pesaron esta vez sobre sus víctimas de una manera feróz, y que ataca el respeto y la honra que debe guardarse á los demas.

Muy cierto es que la vida del hombre merece nuestra consideracion; pero en ciertos casos no puede ser ilimitada, antes bien conduce á restringirla, un hecho que lleva